

Actuación policial con perros potencialmente peligrosos

Autores: López Sánchez, Yeray (Técnico Superior Universitario en Dirección y Gestión Policial, Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria); Castellano Castellano, José Andrés (Experto en Aprendizaje animal y métodos de educación y adiestramiento orientado a perros detectores, de seguridad y rescate, Policía Local).

Público: Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómico y Policía Local. **Materia:** Seguridad ciudadana y animal. **Idioma:** Español.

Título: Actuación policial con perros potencialmente peligrosos.

Resumen

Las intervenciones policiales con animales catalogados como potencialmente peligrosos se realizan a diario. Por ello con este artículo hemos querido dotar a los agentes de unos recursos mínimos para poder intervenir con seguridad. Acciones simples como que el tenedor de este tipo de animales, haga uso del bozal obligatorio o ate a su cánido, pueden hacer que la intervención sea infinitamente más segura de lo que puede ser en un principio, debido a que existen individuos que no dudarían en lanzar su animal contra el agente interviniente, en caso de creerlo conveniente.

Palabras clave: tenencia responsable, Pitbull Terrier, seguro obligatorio, bozal, animales equilibrados.

Title: Police action with potentially dangerous dogs.

Abstract

Police interventions with animals classified as potentially dangerous are done daily. Therefore, with this article we wanted to equip the agents with a minimum of resources to be able to intervene safely. Simple actions such as the holder of this type of animal, make use of the mandatory muzzle or even his canine, can make the intervention infinitely safer than it may be at first, because there are individuals who would not hesitate to throw their animal against the intervening agent, if you believe it appropriate.

Keywords: Responsible holding, pitbull terrier, compulsory insurance, muzzle, balanced animals.

Recibido 2017-02-15; Aceptado 2017-03-03; Publicado 2017-03-25; Código PD: 081079

Antes de comenzar a hablar de cómo debemos intervenir con este tipo de cánidos, o mejor dicho, con este tipo de propietarios, hablaremos sobre ellos, los propietarios, para nosotros pieza fundamental de lo que puede llegar a ser un perro potencialmente peligroso.

El perro por lo general viene a ser fiel reflejo de su propietario o tenedor, términos que deberemos manejar a la hora de intervenir con estos animales. Podemos afirmar, aun entendiendo que existen factores genéticos que hacen que estas razas tengan un marcado carácter y gran valor, que un alto porcentaje del comportamiento del animal proviene del manejo del hombre. Falta de socialización, carencias en el manejo o incluso condiciones higiénico sanitarias inadecuadas pueden influir en el carácter y estado anímico del cánido.

Policialmente hablando, este tipo de perros suele ser portado por personas de barrios de alguna manera estigmatizados por causas como la delincuencia, las drogas, o el paro; con nivel cultural medio-medio bajo, que incluso los utilizan como forma de imponer su virilidad. Por tanto, a la hora de la intervención policial, no solo nos enfrentamos a un animal, que a poco que se empeñe, podría hacernos daños, sino a un propietario o tenedor, que en un momento dado puede ser más peligroso que el propio animal.

Demos por superado, que a la hora de intervenir sea con un perro o no, los policías deberán intervenir en pareja y de no darse esa situación, comunicaremos de inmediato a la Sala de Transmisiones la apertura del parte correspondiente, señalando ubicación de la intervención, con el fin de obtener un apoyo inmediato, de ser necesario.

Lo primero que deberemos garantizar en el requerimiento policial, son las medidas de seguridad, para ello, solicitaremos al requerido, que ate al animal de no llevar correa y/o collar, colocar bozal de no llevarlo puesto y mantener una distancia de seguridad suficiente para en caso de ataque tener margen de respuesta.

La documentación a aportar por el tenedor será, cartilla de vacunación, donde figuren los datos del titular y los del animal, número de microchip y tratamiento preventivo antirrábico en vigor, asimismo, mostrará licencia expedida por el Ayuntamiento correspondiente.

A partir de aquí, hablaremos de diferentes supuestos que se nos pueden dar a la hora de la intervención policial.

Es habitual observar pasear a un cachorro de dos meses de edad por la vía pública sin bozal. Si nos limitamos a aplicar la normativa actual, ese tenedor, debería ser propuesto para sanción puesto que la normativa, no recoge, con qué edad debe el animal hacer uso de bozal. Nuestra recomendación, es que podamos tener cierta flexibilidad con este hecho, con perros de hasta seis meses edad, puesto que no es hasta ese momento, que el perro tiene una mandíbula lo suficientemente potente como para hacer daño, por el contrario, un uso excesivo de bozal, puede hacer que el animal no se desarrolle todo lo que nos gustaría desde un punto de vista etológico.

Otra situación similar, es intervenir con cánidos de entre seis y ocho meses de vida, donde su tenedor manifiesta al agente, que este, carece de medio de identificación, puesto que su veterinario le ha dicho que esta acción se realiza a partir de los seis meses. Lo primero que debemos tener en cuenta como fuerza actuante, es que esta identificación, salvo criterio veterinario motivado, debe ser llevada a cabo, como máximo a los tres meses de vida del animal. A su vez, deberemos tener en cuenta, que un perro que carece de microchip, superando los tres meses de vida, salvo justificación veterinaria; automáticamente carece de tratamiento preventivo antirrábico, puesto que es una vacuna asociada al microchip; por tanto, en una misma acción, obtendremos dos infracciones.

Y llegamos, al tema estrella, cuando hablamos de animales potencialmente peligrosos. La licencia, emitida por el Ayuntamiento donde reside el tenedor de este tipo de animales. Puntos de vista sobre este documento, hay como dedos en nuestro cuerpo, y es que desgraciadamente, no hay un criterio único, incluso dentro de una misma Comunidad Autónoma, existen grandes diferencias de un municipio a otro. A nuestro modo de ver, la manera que más se ajusta a la normativa actual es la siguiente: Una vez el ciudadano ha obtenido la licencia, esta, habilita para la tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, no solo perros, también escorpiones, serpientes, etc, eso sí, estos animales deben quedar inscritos en un registro municipal de animales potencialmente peligrosos, dicho sea de paso, no todos los municipios cuentan con este registro. Por tanto, una única licencia debe ser suficiente para cuantos perros, que es el caso que nos ocupa, tenga el portador de la misma. Cosa que no ocurre en la práctica, ya que muchos Ayuntamientos, obligan a sus contribuyentes a obtener una licencia por animal.

Varios son los requisitos para obtener este tipo de licencia, ser mayor edad, carecer de antecedentes penales o concertar un seguro de responsabilidad civil, son algunos de ellos, y es en este último, donde podemos tener algún problema a la hora de intervenir con el tenedor de un perro potencialmente peligroso. Resulta que las licencias establecen una vigencia de cinco años, sin embargo, las pólizas de seguros suelen ser renovadas anualmente. Entonces, ¿en qué repercute esto? Pues en que un ciudadano obtiene la licencia por primera vez, paga la póliza de seguros el primer año y luego, podría estar hasta cuatro años con una licencia sin haber pagado un seguro. Por consiguiente, este hecho constituye una infracción a la ley para la tenencia de este tipo de animales, porque al carecer de seguro, automáticamente ha perdido uno de los requisitos para la obtención de la misma, siendo el hecho denunciante, conforme al artículo 13 B de la ley 50/99 y no por carecer de seguro, como se suele afirmar, ya que esta norma, no recoge la infracción por carecer de seguro de responsabilidad civil.

Otro tema espinoso de la citada norma es la aplicación de sus anexos. Si bien, el Anexo I es bastante claro, o sea, cualquier de las ocho razas que se recogen y aquellos que sean cruces de ellos; en su Anexo II no proporciona bastante juego, ya que en el mismo se recogen una serie de características físicas, las cuales, si el animal tiene todas o la mayoría de ellas, este, pasa a ser catalogado como potencialmente peligroso. A efectos prácticos, resulta que más del cincuenta por ciento de los perros de raza o mestizos, que superen los veinte kilos de peso van a reunir todas o la mayoría de estas características, por tanto, se antoja un tanto subjetivo la aplicación de este anexo.

Nuestra valoración a la hora de intervenir como agentes de la autoridad, es que solo aplicaremos el anexo I de la norma, o sea, las ocho razas y sus cruces directos, ya que de aplicar el anexo II a nuestro parecer, puede generar indefensiones a los ciudadanos ya que porqué denunciemos a un Doberman y no a un Labrador Retriever, ambos cumplen la mayoría de características físicas, si bien, el Doberman es una raza estigmatizada por eso de que “su cerebro crece más que el cráneo y por tanto se vuelven locos a determinada edad” hecho falso a todos los efectos; y el Labrador Retriever es ese cánido adorable de la marca de papel higiénico o que se usa en labores de perro lázaro.

Existen municipios donde además de las ocho razas recogidas, añaden otras razas como el Pastor Alemán, Dogo Canario o San Bernardo. Si bien es cierto, que estas razas cumplen todas o la mayoría de las características físicas y que podrían ser propuestos para sanción conforme al anexo II de la norma, es una sanción que si se aplica como raza y no por características, puede ser muy fácil su recurso y es que queda recogido que los Ayuntamientos, podrán desarrollar la normativa para la expedición de licencias, pero no son competentes a la hora de incluir nuevas razas en el anexo I, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el facultado para tal acción.

Para concluir este artículo queremos manifestar que esta norma, se encuentra obsoleta, alejada de la realidad social en la que vivimos, la cual fue creada y aprobada por personas profanas en la materia, que dada la urgencia del momento tuvieron que legislar. Desde el punto de vista policial no nutre a los agentes de herramientas jurídicas claras para intervenir, sobre todo con animales de raza mestiza, a su vez, deja en clara indefensión a muchos ciudadanos que el único mal que han hecho es tener un animal con una fama inmerecida.